



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Ana Isabel Morales Posada
DEMANDADA:	Protección SA y Colpensiones
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
TEMA	Ineficacia
DECISIÓN:	Confirma sentencia.
RADICADO Y LINK:	05001-31-05-004-2021-00143-01 <a href="#">(063) 05001310500420210014301</a>

Medellín, a los veintitrés (23) días de agosto de dos mil veintitrés (2023),

AUTO RECONOCE PERSONERÍA

Conforme con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 del Código General del Proceso, en los términos del poder obrante el archivo 05Alegatos y Sustitución Colpensiones -02Segunda instancia, se reconoce personería para actuar en representación de Colpensiones a la doctora Kelly Yiseth Holguín Serna con Tarjeta Profesional 238.479 del Consejo Superior de la Judicatura.

En la fecha la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por las Magistradas, **Luz Amparo Gómez Aristizábal, María Eugenia Gómez Velásquez Y Claudia Angélica Martínez Castillo** como ponente, se reunió para resolver el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el Proceso Ordinario Laboral adelantado por la señora Ana Isabel Morales Posada en contra de Colpensiones y Protección SA frente a la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito.

**Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:**

## SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

### I. ANTECEDENTES:

#### 1.1. PRETENSIONES.

La señora Ana Isabel Morales Posada promovió demanda en contra de Colpensiones y Protección SA, buscando la declaratoria de ineficacia de su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPM) al Régimen de Ahorro Individual (en adelante RAIS), así como que ha estado afiliada a Colpensiones sin solución de continuidad. Y en consecuencia de ello se condene a Protección SA a devolver al RPM la totalidad de los valores recibidos por la afiliación de la actora, y que Colpensiones valide los aportes en pensiones trasladados por Protección y los incorpore en su historia laboral de pensiones; costas y agencias en derecho.

#### 1.2. HECHOS

Relató la actora que se trasladó del RPM al RAIS el 1 de noviembre de 2002, y a pesar de haber suscrito contrato de traslado, Protección SA omitió el buen consejo, debido a que no le brindó información clara y completa de los beneficios, contras y/o consecuencias del traslado.

Indicó que solicitó a Protección información de su pensión y aceptación de traslado el 7 de abril de 2021, y que por otra parte solicitó ante Colpensiones aceptación del traslado el 19 de marzo de 2021, negado en la misma fecha.

#### 1.3. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas se pronunciaron de forma oportuna, así:

**Colpensiones** aceptó el hecho del traslado de la demandante del RPM al RAIS y respuesta negativa que le dieron ante el agotamiento de la reclamación administrativa de aceptación del traslado a Colpensiones, pero que no consta de los

hechos relacionados con su afiliación al RAIS ni de la información suministrada por ser hechos ajenos y que radican en cabeza de Protección SA. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de fondo: inexistencia del traslado de régimen, inexistencia de ineficacia del traslado a la AFP Protección, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP Protección ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, indebida aplicación del artículo 1.604 del CC, desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en el RPM, desconocimiento del precedente judicial, equivalencia del ahorro o diferencias pensionales, devolución de aportes debidamente indexados, devolución de cuotas de administración debidamente indexadas por parte de la AFP protección, buena fe de Colpensiones, prescripción, compensación, imposibilidad de condena en costas, condena en costas y la innominada.

**Protección SA** respondió a los hechos que es cierto que la demandante elevó solicitud de información de su pensión y traslado, que no le consta de la solicitud que elevó a Colpensiones de aceptación de traslado por ser un hecho ajeno a esa entidad, y se opuso a los hechos que hablan de una indebida información suministrada al momento de su traslado y de los hechos que rodearon su afiliación y permanencia al fondo. Se opuso a la prosperidad de lo pedido y propuso las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, Inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, y la innominada o genérica.

#### **1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 13 de marzo de 2023, dispuso:

PRIMERO: Declarar la ineficacia del traslado de la demandante señora Ana Isabel Morales Posada, identificada con cédula 43509248 y que hiciera del régimen del Prima Media con prestación definida Administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones al RAIS administrado por Colmena, pensiones y cesantías, hoy

administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección SA para la data del 21 de junio de 1994.

SEGUNDO: Ordenar a la sociedad Protección SA representada legalmente por quien haga sus veces que, en virtud de esta declaratoria de ineficacia, retorne a Colpensiones dentro de los 30 días hábiles siguientes, los valores que reposan en la cuenta de ahorro individual y que hubiese recibido con motivo de la afiliación, tales como cotizaciones, aportes y rendimientos en su totalidad, los gastos de administración, pagos de seguro y reaseguro y pagos destinados al fondo de pensión. Garantía mínima retornarán a Colpensiones debidamente indexados desde su causación hasta su pago y con cargo al propio patrimonio de la entidad sociedad Protección SA deberán estar acompañados de la documentación pertinente y necesaria que acredite ciclos y valores y detalles importantes para Colpensiones.

TERCERO: Ordenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones EICE representada por quien haga sus veces para que, acepte los valores de la cuenta de ahorro individual ya definidos, garantice la afiliación de la demandante, y actualice el histórico laboral de aportes sin solución de continuidad.

CUARTO: Desestimar las excepciones propuestas por la sociedad AFP protección SA y por Colpensiones.

QUINTO: Condenar en costas a la AFP protección, agencia en derechos se tarifo en \$2.500.000; no hay condena en costas ni a favor ni en contra de Colpensiones.

SEXTO: Disponer el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones únicamente en caso de no proponer recurso de apelación.

## 1.5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

El procurador judicial de la **demandante** solicitó que en caso de confirmarse la sentencia se condene en costas y agencias en derecho en esta instancia a los apelantes, ante el desgaste desmesurado del aparato judicial por parte de los demandados.

La apoderada de **Colpensiones** expresó que el demandante no probó los supuestos de hecho y de derecho para que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS porque no se puede eximir de sus obligaciones procesales. Que como la motivación actual de la actora para retornar al RPM es la expectativa económica de su mesada pensional porque su mesada pensional sería superior, no soporta un vicio por error de derecho y no se puede decir que se ha viciado su consentimiento. Que no puede considerarse a todos los afiliados como una parte débil e indefensa, quienes por interés propio deben asesorarse de la mejor manera.

Señaló que la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones se ve afectada con la declaratoria injustificada de la ineficacia de traslado, lo que además

pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados. Por lo que en caso de que se confirme la decisión se adicione que los gastos de administración y demás emolumento recibidos por la AFP respectiva, sean devueltos de manera indexada, para asegurar el reconocimiento y pago de las prestaciones a las que sea obligada. Y que no se causas costas a su cargo por lo que se debe exonerar del pago de las mismas.

## **I. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO.**

Conoce la Sala de la consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

### **2.2. PROBLEMA JURÍDICO**

Esta Sala analizará, si acertó el juez al declarar la ineficacia del traslado de la demandante Ana Isabel Morales Posada al RAIS, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y establecer las consecuencias derivadas de ello.

### **2.3. HECHOS RELEVANTES PROBADOS**

De acuerdo con el acervo probatorio aportado, no hay duda que **(i)** la demandante nació el 24 de febrero de 1967 como se desprende de la fotocopia de su cédula (folio 05 archivo 03); **(ii)** se afilió al RPM a través del ISS desde el 18 de marzo 1987 hasta el 30 de mayo de 1994 de acuerdo a la historia laboral allegada por Colpensiones (folio 54 archivo 09) **(iii)** se trasladó al RAIS el 21 de junio de 1994 administrado por Colmena Cesantías y Pensiones, hoy administrado por Protección SA, con la suscripción del formulario de vinculación corroborado con el certificado de Asofondos, con afiliación activa a partir del día 01 de julio de 1994 (folio 79 y 80 archivo 08); y migrando dentro del mismo RAIS a Protección SA como se desprende del formulario fechado 17 de septiembre de 2002, con fecha de efectividad el 01 de noviembre de 2002 (folio 83 archivo 08).

## 2.4. INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, se hará acreedor a las sanciones del inciso 1º del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con la cual, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quede sin efecto.

El segundo aspecto a considerar es que, si bien la afiliación es libre y voluntaria, también es cierto que, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato. Tal como lo dispone el artículo 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, que la misma debe ser transparente a los afiliados, *«de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas»*.

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando la administradora incumplió la obligación de brindarle la información necesaria, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: *«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»* (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por la actora que *«no recibió la información»*, por tratarse de una negación indefinida, la releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para

acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

*el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),*

Ahora, el hecho de que la afiliada hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Siguiendo las reglas de la prueba, como la afiliada alegó la falta de información, la falta de claridad o la mala entrega de la misma por la AFP, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, afirmación respaldada en el artículo 1.604 del Código Civil, que señala: «*la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha usado*».

De tal manera que la actora, al afirmar que «*no recibió la información*», por tratarse de una negación indefinida, la releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba al demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado. Debido a que son éstas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era Protección SA quien debía probar en el proceso que se brindó una asesoría personalizada y completa a la demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.



Ello por cuanto desde la creación de las AFP, estaban compelidas a suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, **ventajas y desventajas** de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las **consecuencias jurídicas del traslado**, como lo preceptúa el artículo 97, numeral 1º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Dentro de sus deberes estaba el de informar, por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la Ley 100 de 93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería.

En fin, mostrarle a la afiliada **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma pueda considerarse que es realmente libre y voluntaria.

Luego resulta necesario insistir en que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al «*deber del buen consejo*», como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores y/o asesores, velar por la información entregada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, a pesar de que Protección SA haya afirmado al contestar la demanda que a la demandante le brindaron la asesoría requerida de manera suficiente para el caso (archivo 08), la Sala no encuentra acertadas tales objeciones, amén de que no es menos cierto que de acuerdo con la jurisprudencia descrita en párrafos precedentes, tenía como carga probatoria acreditarlo. Sin embargo, ninguna prueba contundente

arrió que dé cuenta de la información realmente suministrada al momento de su afiliación que implicó el traslado de régimen.

Pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel, aunado a que tampoco se pueden escudar en que la afiliada no haya formulado cuestionamientos al momento de su traslado, o como lo alegó Colpensiones que tenía la obligación de informarse, porque de ello no se puede inferir que su traslado se hizo con la plena convicción de las ventajas y desventajas que ello le traería a futuro precisamente por la indebida información suministrada por la AFP.

Así las cosas, en el caso a estudio concluye la Corporación que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como es, el **deber de información**, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho a la pensión de vejez, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella, como que la demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión de primer grado.

## **2.5. CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.**

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Reflexiona la Corporación que al declararse la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, **todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante**; por lo que es legítimo que Protección SA traslade a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados,

**sin que la AFP pueda conservar ningún valor descontado de la cotización,** como lo ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

Frente a lo correspondiente con la orden de indexación de las condenas, a la cual se opuso el apoderado de Protección SA, se conceptúa que hay lugar a la indexación de los gastos de administración, las primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, ceñida a los parámetros establecidos recientemente por nuestro órgano de cierre, en sentencias SL359-2021 y especialmente la SL950 de 2022, en las que se señala:

... Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones. Criterio que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.

## **2.6. PRESCRIPCIÓN**

La excepción de prescripción no está llamada a prosperar por cuanto la acción que involucra el tema de traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con la causación, requisitos y valor de la pensión, ante ello se debe predicar la imprescriptibilidad de la presente acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a

diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

## **2.7. CONDENA EN COSTAS A LA PARTE VENCIDA EN JUICIO**

Son las costas procesales los gastos económicos sufragados por parte que venció en juicio, y que deben ser declarados por el Juez de conocimiento en la sentencia en contra de la parte vencida, encontrándose que en sus alegatos el apoderado de la demandante solicita se condene en costas en segunda instancia a ambas demandadas, se le advierte que tal punto no fue objeto de apelación y en esta instancia se está conociendo del grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de Colpensiones. Por lo que, no hay lugar a pronunciarse al respecto, así como se le recuerda al apoderado de Colpensiones, en primera instancia solo se condenó en costas y agencias en derecho a Protección SA

En congruencia con los argumentos antes expuestos se encuentra ajustada a derecho la decisión del juez al condenar en costas en primera instancia a la demandada Protección SA.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada en consulta se confirmará.

Sin lugar a condena en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **IV. DECIDE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de marzo de 2023 dentro del proceso promovido por Ana Isabel Morales Posada contra AFP Protección SA y Colpensiones; según las consideraciones de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Sin lugar a condena en costas de segunda instancia.

Las Magistradas,

  
CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL

  
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ